

JUICIO: PROVINCIA DE TUCUMÁN - D.G.R. c/ SALAZAR RICARDO ADRIAN s/
EJECUCION FISCAL. EXPTE: N°153/21. RECURSO EXTRAORDINARIO FEDERAL
POR LA PARTE DEMANDADA.

San Miguel de Tucumán, 19 marzo de 2023

Corte Suprema:

I.- Vienen las presentes actuaciones ante este Ministerio Público Fiscal a fin de dictaminar respecto a la admisibilidad del recurso extraordinario federal presentado el día 21/11/23 por la abogada apoderada de la parte actora en contra de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán del 01/11/2023.

II.- La sentencia en crisis resolvió no hacer lugar a su recurso de casación contra la sentencia N° 77 de la Cámara de Cobros y Apremios del Centro Judicial de Concepción, de fecha 30 de junio de 2022.

Ha aplicado la jurisprudencia de la CSJN, que en un fallo muy reciente, ha sido mantenida. El 07/03/2023 en autos "Recurso de hecho deducido por la actora en la causa Alpha Shipping S.A. c/ Provincia de T.D.F. A. e I.A.S. s/ contencioso administrativo - medida cautelar",

Para ello ha considerado la aplicación de principios de derecho penal en materia de prescripción, siguiendo para ello el criterio sentado por la Corte Federal.

Concluyendo que se deduce sin hesitaciones que la norma más benigna para el ejecutado en materia de prescripción, la constituye, en el sub iudice, la normativa de fondo del Código Penal, en cuanto establece un plazo más breve de prescripción para el ejercicio de la acción punitiva y para la ejecución de la multa (2 años según artículos 62, inciso 5, y 63, inciso 4, respectivamente), en contraposición a los 5 años contemplados en el CTP para ambos supuestos (artículo 54 Ley N° 8964 - BO del 29/12/2016).

III.- La recurrente se agravia en el ataque a las autonomías provinciales que constituye una cuestión federal simple, puesto que en la especie el actor ha introducido a la discusión el eventual conflicto entre una norma tributaria local contemplada en el Código Tributario Provincial (art. 54 Ley 8964 – 2 BO:29/12/2016) y aquellas previstas en el Código Penal Nacional (arts.62 inc. 5° y 3 63 inc. 4°).

Argumenta la gravedad institucional en que la cuestión impacta en la buena marcha de las instituciones, en la comunidad en su conjunto y en la potestad provincial en materia tributaria.

Afirma que el fallo Alpha Shipping, en lo que respecta a la solución allí acordada, no resulta traspolable al sub examine, éste tiene una obligatoriedad

atenuada bajo nuestro régimen federal de gobierno, motivo por el que todos los argumentos expuestos por la sentencia en crisis que pretenden motivar ilusoriamente el fallo en dicha obligatoriedad, carecen de toda fuerza imperativa en el caso que nos ocupa. Dicha motivación aparente, torna entonces al fallo dictado en arbitrario, haciéndolo pasible de revisión en esta vía extraordinaria federal.

Denuncia criterios contradictorios de la Corte sobre la prescripción, arbitrariedad que deviene en inseguridad jurídica y en gravedad institucional.

Expone otros agravios que se dan por reproducidos, cita jurisprudencia y propone doctrina legal.

IV.- El recurso extraordinario se interpuso en término, acompaña la carátula y el escrito no supera las carillas reglamentarias y, a su turno, las carillas no exceden la cantidad de renglones exigidos por el Reglamento aprobado por la Acordada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación nº 4/2007, está dirigido contra la sentencia definitiva emanada del superior tribunal de la causa y constituye domicilio electrónico como lo exige la Acordada Nº 3/2015 CSJN.

V.- El recurso es inadmisibile.

El derecho público provincial está excluido del juicio de la Corte Suprema de la Nación, salvo que se demuestre que tales normas repugnan al derecho federal. En consecuencia, el art. 14 de la Ley Nacional 48 dispone en su inciso 2º: "Cuando la validez de una ley, decreto o autoridad de Provincia se haya puesto en cuestión bajo la pretensión de ser repugnante a la Constitución Nacional, a los Tratados o leyes del Congreso, y la decisión haya sido en favor de la validez de la ley o autoridad de provincia", y esto no se logra evidenciar en este caso, por lo que el recurso incumple con el requisito de configurar cuestión federal.

La Corte Suprema Nacional ha destacado reiteradamente que la doctrina de la arbitrariedad no resulta apta para corregir fallos que el recurrente estime equivocados según su criterio, sino que tiende a cubrir defectos realmente graves de fundamentación o razonamiento, que impiden considerar la sentencia apelada como acto jurisdiccional válido (CSJN, Fallos, 301:1218; 302:588; 312:608, entre muchos otros). Lo contrario importaría extender la jurisdicción de la Corte Nacional para revisar todos los pronunciamientos que se dicten en el país, con menoscabo de los límites establecidos por la Constitución y las leyes (CSJN, Fallos, 306:263 y sus citas). Por otro lado, no puede perderse de vista que la tacha de arbitrariedad formulada en definitiva aparece fundada en una mera discrepancia de la parte recurrente para con la interpretación de normas procesales o de derecho común o de derecho tributario local practicada por el tribunal de la causa (Fallos: 276:132 y 248; 277:144; 289:406; 295:585; 296:535, 568 y 570; 300:92; 303:862 y 1146; 305:240; 306:765 y 2056; 307:1100; 308:1372; 310:405; 311:904; 313:840; entre otras).

Finalmente, las normas discutidas y la cuestión debatida pertenecen a la esfera del derecho público local y no resulta atendible contemplar las hipotéticas lesiones constitucionales invocadas

Tampoco se advierte interpretación errónea o absurda del tema debatido, por lo que resulta aplicable el criterio según el cual: *lo atinente al cumplimiento del plazo de prescripción y a la determinación del momento en que ha de comenzar su cómputo es cuestión de hecho y de derecho común, propia de los jueces de la causa, no revisable por la vía del recurso extraordinario (CSJN, Fallos 297-392; 305-49; LL 1985-C, 663; 1984-D, 697, etc.).*

De la confrontación entre el fallo impugnado y los fundamentos del recurso se colige, a la luz de los criterios expuestos precedentemente, la falta de sustento de la alegada arbitrariedad y la insuficiencia del libelo recursivo para provocar la apertura de la vía extraordinaria federal.

VI.- En definitiva, a criterio de este Ministerio Público Fiscal, el recurso extraordinario federal en contra de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán del 01/11/2023, es inadmisibile.

Mi opinión.


Dr. EDMUNDO J. JIMENEZ
MINISTRO FISCAL
MINISTERIO PUBLICO FISCAL
TUCUMAN